
Resistencia social en Colombia

Entre guerra
y neoliberalismo

JAIME RAFAEL NIETO LÓPEZ

Sociólogo, magister en Ciencia Política y profesor titular de la Universidad de Antioquia. Doctor en Pensamiento Político, Democracia y Ciudadanía por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (España). Miembro del Grupo de Investigación, Cultura, Política y Desarrollo Social de la Universidad de Antioquia.

Resumen

Para comprender el proceso de la resistencia social colombiana (2000-2010) el autor propone como eje de análisis el impacto del “neoliberalismo armado”. El costo político-social de la implementación del modelo económico es un alto grado de despolitización, que *cuasi* desaparece la posibilidad de incidencia política directa. Por otra parte, la política de guerra que mantiene el gobierno colombiano contra las guerrillas tiene múltiples consecuencias, entre las que señala el desvío del presupuesto del gasto social a favor de la guerra, desplazamiento de población –que favorece a la estructura agraria latifundista–, es decir, un proceso de marginalización con altos índices de pobreza. Así, la resistencia civil se articula alrededor de una sola demanda, “seguridad”, la cual carece de una forma homogénea. En palabras del autor, “son expresiones fragmentadas” en espera de una oportunidad política de participación real.

Abstract

In order to understand the process underlying the Colombian social resistance (2000-2010), the writer proposes an analysis of the “armed neoliberalism” impact. The social and political cost of implementing this economic model represents so high a degree of depolitisation that the possibility of direct political influence practically disappears. Additionally, the war policy pursued by the Colombian government against guerrillas has multiple consequences, including the diversion of funds from the welfare budget to the war, and population transfers –which ultimately favour *latifundia* (landowners’ agrarian structure)–, ie it entails a social marginalisation process with high poverty rates. Hence, civil resistance hinges upon one single demand: “safety”, which is not homogeneous in form. In the writer’s words, these are “fragmented expressions” awaiting political opportunity for real participation.

Palabras clave

Conflicto armado interno, derechos humanos, guerrilla, paramilitarismo, neoliberalismo.

Keywords

Armed conflict in Colombia, human rights, guerrilla, Colombian paramilitarism, neoliberalism.

Cómo citar este artículo

Nieto López, Jaime Rafael 2011 "Resistencia social en Colombia: entre guerra y neoliberalismo" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XII, N° 30, noviembre.

Colombia es, quizás, el único país de América Latina en el que los dos rasgos característicos del poder hegemónico mundial del imperio se conjugan de manera *integral*. Mientras la mayoría de los países de la región encaran desde finales del siglo XX el desafío de la globalización neoliberal y sus efectos perversos en términos de desigualdad, pobreza, exclusión social e inestabilidad institucional, Colombia debe enfrentar *adicionalmente* los términos de una guerra endémica de más de cincuenta años que la somete aún más a los vaivenes de la política internacional y obstruye las posibilidades de construcción de actores sociales orgánica y políticamente robustos. En la conjugación de estas dos tendencias mundiales radica una de las más importantes excepciones de Colombia en el escenario latinoamericano. En ellas también radica la especificidad del contexto de acción de las diferentes lógicas de experiencias de resistencia y movilización social protagonizadas por múltiples actores sociales en Colombia en los últimos años (Nieto López, 2008).

El propósito de este artículo es brindar una mirada panorámica, nada exhaustiva, de la trayectoria de la resistencia social en Colombia durante los últimos diez años, tomando como referente central los ejes de la guerra y las políticas sociales y económicas derivadas de la aplicación del modelo neoliberal por parte de los gobiernos de turno durante los últimos veinte años. Sin duda, el espectro de las acciones de resistencia social en Colombia es mucho más amplio, pero sin caer en simplificaciones extremas puede decirse que alrededor de estos dos ejes (que ya son suficientemente amplios) han gravitado en los últimos años sus más relevantes y persistentes expresiones. Guerra y neoliberalismo siguen siendo, hoy, contexto y referente obligado de la resistencia y la movilización social en el país.

Para referirme a estas múltiples expresiones de movilización social o de acciones colectivas realizadas por los sectores subalternos en Colombia contra el neoliberalismo y la guerra, prefiero utilizar en este escrito el concepto más amplio de resistencia social en vez del más orgánico de movimientos sociales o el inorgánico de protestas sociales. La elección, más que de preferencia teórica, es de amplitud descriptiva, ya que como lo he mostrado en otra parte (Nieto López, 2009), la resistencia más que referirse a una modalidad específica de acción social colectiva, se refiere a una lógica de acción, que se caracteriza porque enfrenta a los subalternos contra todo tipo de poder o de dominación o contra cualquier forma de injusticia,

percibidos como tal por los propios sujetos que la protagonizan. De modo que para el caso colombiano el concepto de resistencia social comprende toda forma de acción social colectiva –pública o soterrada, confrontacional o simulada, molar o molecular, antiestatal o no, orgánica o inorgánica– orientada a socavar o enfrentar lógicas de dominación y poder *in situ*.

Neoliberalismo armado en Colombia

Aunque un poco tardíamente si lo comparamos, por ejemplo, con los países del cono sur, Colombia aplica y consolida la modernización neoliberal de la economía y la privatización del Estado en los marcos del Consenso de Washington, tal como desde comienzos de los años ochenta lo viene haciendo el resto de países latinoamericanos. Como los demás países de la región, aunque con ritmos y desarrollos diferentes, los gobiernos de Colombia de los últimos veinte años profundizan las políticas de libre mercado, a través de un fuerte intervencionismo estatal orientado a flexibilizar el mercado laboral, el flujo de capitales y del comercio, la privatización de sectores clave de la economía nacional como las telecomunicaciones, la banca, el petróleo, servicios públicos, seguridad social, educación y salud, entre otros. La reciente firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) con el gobierno de los EE. UU. y con la Unión Europea confirma el interés del gobierno colombiano (Uribe Vélez y Santos) de profundizar y consolidar el modelo neoliberal instaurado en Colombia desde finales de los años ochenta.

El cambio del modelo de desarrollo que prevaleció en Colombia durante la segunda postguerra mundial, basado en el mercado interno y la industrialización sustitutiva con regulación social por parte del Estado, se produjo desde finales de los años ochenta. La transición de Colombia hacia el modelo neoliberal de desarrollo inició con el gobierno del presidente Virgilio Barco (1986-1990), estableciéndose firmemente bajo el gobierno del presidente Gaviria (1990-1994), a través de su política de apertura e internacionalización de la economía. Los gobiernos de los presidentes Uribe (2002-2010) y Santos (2010 al presente) no han sido la excepción en conservar el sentido y alcance de la política económica y social de los gobiernos anteriores acordes con el nuevo modelo de desarrollo. Por el contrario, parecen más decididos a profundizarlo. En el campo de las privatizaciones y reestructuración estatales continúan con la reforma de entidades estratégicas como, por ejemplo, Telecom, Ecopetrol y el ISS, al tiempo que el Plan de Desarrollo del actual presidente Santos incorpora una nueva fase del modelo, a través de una agresiva reprimarización de la economía basada en una política económica orientada a la explotación minera (carbón, gas, oro, petróleo) y la agroexportación de productos como caña de azúcar, soya y palma africana, con grandes inversiones de capital provenientes de las multinacionales y sectores vinculados estrechamente al narcotráfico, sobre la base del despojo de más de 6 millones de hectáreas efectuado durante la década pasada contra comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.

En el ámbito social, las lógicas mercantilistas del nuevo modelo se hacen sentir. El gobierno del presidente Uribe, por ejemplo, hizo aprobar por el Congreso de la República la Ley N° 789 de 2002, que consagró una nueva reforma laboral a

expensas de los derechos de los trabajadores. Esta reforma flexibilizó aún más la contratación laboral, suprimió el pago de las horas extras y recortó los pagos extraordinarios de dominicales y festivos a los trabajadores; impuso una política de ajuste de los salarios del sector público por debajo de la inflación. Por otro lado, hizo aprobar en el Congreso de la República una nueva Reforma Tributaria, que incrementó el porcentaje del cobro de IVA y amplió aún más su base gravable, al tiempo que redujo o suprimió impuestos y tasas al capital nacional y transnacional. En los presupuestos anuales se efectuaron sistemáticos recortes al gasto público social destinado a salud y educación y a las transferencias fiscales a municipios y departamentos. Por su parte, el presidente Santos tramita en el Congreso una ley que redefine la asignación de los recursos a los municipios por concepto de regalías en detrimento de estos últimos.

El sentido y alcance de estas políticas, además de profundizar, como se dijo, las reformas de mercado, se orienta al desmonte definitivo del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución de 1991, y a la reformulación de las políticas públicas en función del mercado y el capital transnacional. Aparte de las ya indicadas contrarreformas sociales, las políticas sociales de bienestar colectivo de la población se privatizan y las que quedan bajo la custodia del Estado no han pasado de ser programas asistencialistas de corto vuelo (Familias en acción y Acción social), focalizados y de escaso impacto social. Por otra parte, en lo que se considera la mayor arremetida contra los derechos sociales y económicos colectivos consagrados por la Constitución de 1991, el presidente Santos hizo aprobar por el Congreso de la República en 2011 la Regla Fiscal, que limita la posibilidad de ejercer tales derechos a la disponibilidad fiscal del Estado.

Desde el punto de vista de la garantía del ejercicio de los derechos de ciudadanía social, puede decirse que la versión neoliberal de las políticas públicas sociales ha arrojado un rotundo fracaso. A partir del proceso de ajuste, reestructuración y apertura, la asimetría entre riqueza y pobreza se profundiza (Sarmiento Anzola, 2005). La contraparte de la aplicación del modelo neoliberal ha sido la profundización de la pobreza, la exclusión social y una mayor desigualdad entre los ciudadanos y ciudadanas del país. De hecho, en Colombia asistimos a procesos crecientes de descuidadización, que se traducen en la imposibilidad por parte de amplios sectores de la población de ejercer los derechos de ciudadanía social consagrados en la Constitución de 1991. Los veinticinco años de reformas neoliberales han estado en contravía de las garantías para el ejercicio y disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales consagrados por el Estado Social de Derecho inscrito en dicha Constitución.

Los costos y efectos sociales de la profundización de las reformas de mercado y privatización del Estado se han hecho sentir con rigor en el estancamiento o deterioro de los indicadores sociales del país en los últimos años. Como lo anota Libardo Sarmiento, uno de los estudiosos más autorizados de la cuestión social en Colombia, la política social no ha afectado la espantosa concentración de la riqueza y las desigualdades sociales al contrario, el modelo de desarrollo ha profundizado y ampliado las brechas. Colombia es una sociedad de "tres cuartos". Mientras 3 de cada 4 ciudadanos son excluidos y viven en condiciones de pobreza, otro 25% vive en condiciones de opulencia y concentra los beneficios del es-

tilo de desarrollo. Esta situación explica la polarización social creciente (Sarmiento Anzola, 2005). Según el informe de desarrollo humano de Naciones Unidas (2005), Colombia se encuentra con relación a la distribución del ingreso entre los 10 países más desiguales en el mundo (similar a muchos de los países africanos) y entre los tres más inequitativos de América Latina (junto a Guatemala y Brasil). Desde mediados de los años setenta, la distribución del ingreso por persona ha pasado de 0,47 a 0,58 puntos en el coeficiente de Gini, 11 puntos por encima del observado hace treinta años.

El panorama social se hace todavía más complejo y azaroso para amplios sectores de la población del campo y la ciudad debido al impacto negativo del conflicto armado, ya que cerca de 3 millones han tenido que emigrar de sus tierras y poblados debido al desplazamiento forzado, las masacres de población civil no combatiente y el crecimiento desmesurado del porcentaje del presupuesto destinado a la guerra (80 mil millones de dólares estadounidenses en los dos gobiernos de Uribe) en detrimento de la participación en bienestar social, educación, vivienda, salud y proyectos productivos colectivos. La guerra ha favorecido todavía más la tradicional estructura latifundista y de haciendas del campo colombiano, excluyendo a la amplia población campesina del acceso a la tierra, recursos de crédito y tecnología que le permita desarrollar empresas productivas sostenibles en el tiempo, viéndose así abocados a sufrir los peores índices de pobreza y exclusión social. Como se dijo antes, en los últimos diez años la población campesina ha sido despojada de cerca de 6 millones de hectáreas de tierras productivas por nuevos o viejos hacendados articulados a las redes del narco-paramilitarismo en las regiones. Los casos emblemáticos de esta contrarreforma agraria, envuelta en escándalos de corrupción, fueron los relacionados con la finca Carimagua y el programa bandera del gobierno de Uribe para el campo, Agro Ingreso Seguro (Reyes Posadas, 2009; Romero, 2011).

Lo paradójico de la situación colombiana es que, mientras la economía crece a ritmos por encima del 4% en los últimos años, la situación de pobreza y exclusión social de los colombianos se deteriora crecientemente. Todo lo cual contradice la versión neoliberal del tradicional desarrollismo colombiano, según la cual con el crecimiento económico llegaría también el desarrollo social. De ahí su énfasis en el estímulo a la inversión de capital y las garantías de seguridad al mismo. Por el contrario, en Colombia, además de una guerra política, los colombianos encaran una guerra social y, en ambas, es la ciudadanía la que lleva la peor parte.

Por otra parte, los “tres huevitos” (seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social), como denominó Uribe Vélez a su política de gobierno, estuvieron estrechamente “empollados”. De modo que el neoliberalismo desembozado que practicó durante su mandato y heredó a su sucesor Santos estuvo sólidamente respaldado en la política de Seguridad Democrática (SD), consistente básicamente en profundizar la guerra contra las guerrillas hasta derrotarlas y someterlas, bajo el supuesto de que en Colombia no existe un conflicto armado interno sino una “amenaza terrorista”, razón para desechar cualquier posibilidad de diálogo con ellas; mientras que, por otro lado, negoció la desmovilización de los grupos paramilitares aglutinados alrededor de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), sobre la base de la impunidad a sus crímenes y la protección de sus

bienes logrados a través del despojo a sangre y fuego de las comunidades rurales. Por último, buscó involucrar cada vez más a la población civil en la confrontación armada, a través de programas como, por ejemplo, soldados campesinos.

Nadie en Colombia discute la eficacia militar de la política de SD del presidente Uribe contra las guerrillas. Por medio de ella se produjeron los más duros golpes militares, especialmente contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Muchos de sus frentes rurales fueron desmantelados o reducidos a su mínima expresión y sus estructuras urbanas en las principales ciudades del país fueron desalojadas; todo lo cual las obligó a un repliegue estratégico hacia territorios de frontera como los departamentos de Nariño, Putumayo, Cauca y Arauca. Este repliegue, acompañado de una reducción significativa de capacidad de combate, implicó una readaptación militar de las guerrillas, llevándolas a retomar su tradicional táctica de “guerra de guerrillas” y a alejarse de la condición militar para el salto a la “guerra de movimientos” lograda en la fase anterior. En esta nueva fase de la guerra, las guerrillas pierden la iniciativa en la confrontación y son las Fuerzas Armadas (FFAA) quienes la retoman. La ofensiva militar del Ejército, como se dijo, ha logrado desalojar a las guerrillas de territorios estratégicos anteriormente bajo su control, desmantelar o neutralizar algunos frentes de las FARC¹ y reducir al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a una especie de resistencia pasiva en la que trata de evitar el mayor combate posible con las FFAA. Como parte de su política contrainsurgente, las acciones militares han venido acompañadas, asimismo, de una eficaz estrategia dirigida a la desmovilización y desertión de miembros de base y mandos medios de las filas de las guerrillas. Se estima que entre 2008 y 2009 alrededor de 12.700 miembros de las FARC se han entregado a la autoridades y más de mil mandos medios han dejado las armas, muchos de ellos con más de diez años dentro de las filas guerrilleras (Llorente, 2009). Sin duda, sobre la eficacia de esta estrategia contrainsurgente cabalgaron los altos índices de popularidad mediática de Uribe Vélez durante sus años de gobierno.

Sin embargo, a pesar de estos éxitos y el triunfalismo que los ha acompañado, hasta el punto de creer que se trataba del “fin del fin de las FARC”², lo cierto es que hasta ahora las guerrillas no han recibido ningún golpe militar que las ponga en situación de derrota estratégica frente a las fuerzas estatales. Por el contrario, desde 2009 parecen dispuestas a retomar la iniciativa militar y recobrar la iniciativa política a través de la oferta de liberación a cuentagotas de secuestrados en su poder y el diálogo epistolar con Colombianos y Colombianas por la Paz, una iniciativa de paz de sectores de la sociedad civil liderada por la senadora Piedad Córdoba. En cuanto a la iniciativa militar, desde 2009 se incrementaron las acciones guerrilleras con resultados contundentes contra las FFAA no sólo en el territorio de frontera hacia donde se habían refugiado, sino también en algunas de sus zonas históricas, como Huila, Caquetá y Meta. Allí se ha evidenciado, además, su intención de proyectarse en lo urbano (Llorente, 2009).

Por otra parte, contra lo declarado insistentemente por el Gobierno Nacional en el sentido de haber puesto fin al paramilitarismo en Colombia, a lo que asistimos desde hace algunos años es al resurgimiento y el rearme de los grupos paramilitares de la mano del narcotráfico, bajo la nueva denominación de Bandas Criminales Emergentes (BACRIM). Muchas de estas “nuevas” bandas paramilitares

corresponden a viejas estructuras paramilitares que se negaron a desmovilizarse durante el proceso anterior adelantado por la mayoría de los miembros de las AUC, y otras corresponden al rearme de grupos anteriormente desmovilizados. Muchas de ellas no sólo mantienen su tradicional actividad del narcotráfico, sino que continúan criminalizando cualquier manifestación de protesta social y política y a sus liderazgos. Todo esto expresa las limitaciones o el fracaso de la política de sometimiento y desmovilización del paramilitarismo por parte del Gobierno Nacional luego de los acuerdos de Santa Fe del Ralito y la promulgación de la ley de Justicia y Paz. De este modo, puede decirse que al final de los dos mandatos consecutivos de Álvaro Uribe Vélez y de aplicación a fondo de la estrategia de guerra en los marcos de la política de SD, pese a sus éxitos relativos, Colombia no es un país finalmente pacificado. Aunque para el presidente Santos, quien fue ministro de Defensa de Uribe, la política de SD no ocupe en su agenda de gobierno la misma prioridad que en la de su antecesor, no ha renunciado a mantenerla y profundizarla.

“Sin embargo, a pesar de estos éxitos y el triunfalismo que los ha acompañado [...], lo cierto es que hasta ahora las guerrillas no han recibido ningún golpe militar que las ponga en situación de derrota estratégica frente a las fuerzas estatales.”

Sin embargo, más allá del grado de eficacia de la política de SD y de su suerte durante el gobierno de Santos, lo que aquí interesa subrayar es el altísimo costo institucional y humanitario (sobre todo este último) que dicha política produjo para el país. Por un lado, la confrontación continua del presidente contra las Altas Cortes, a las que intentó someter desde un comienzo a las lógicas y preceptos de la política de SD, especialmente en materia de impunidad y de reconocimiento político a los paramilitares, el desconocimiento del gobierno al derecho de las víctimas a verdad, justicia y reparación; lo mismo que a los derechos de la población desplazada. Tal confrontación, efectuada especialmente contra la Corte Suprema de Justicia, se exacerbó a raíz de las investigaciones y juzgamiento adelantados por ésta contra políticos de su partido (el Partido Social de Unidad Nacional, conocido como “partido de la U”) por sus vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico (parapolítica); o por las interceptaciones telefónicas ilegales (“chuzadas”) y otras formas de espionaje realizadas desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía de seguridad del gobierno) contra magistrados de la Corte, periodistas y líderes de la oposición, lo mismo que por investigaciones contra actos de corrupción en organismos nacionales que comprometen a personal político de su partido. Tal confrontación desencadenó un ambiente de desinstitucionalización nunca antes visto desde la promulgación de la Constitución de 1991.

Pero el costo más grave de dicha política fue el humanitario, registrado en los altos índices de violación sistemática de los DD. HH. a manos del ejército y organismos de seguridad del Estado contra la población civil y del Derecho Internacional Humanitario (DIH) por parte de paramilitares y guerrillas. Un referente

emblemático en esta materia fueron los llamados “falsos positivos”, 3 mil crímenes cometidos por las FF. AA. contra jóvenes a quienes luego presentaban como guerrilleros. Pero también se presentaron bombardeos indiscriminados, desplazamiento forzado y masacres contra la población civil a raíz de las incursiones del ejército o los paramilitares; así como desapariciones forzadas, asesinato de sindicalistas y líderes sociales, secuestros, ataques indiscriminados contra instalaciones civiles y comunitarias, persecución, amenazas y destierros contra defensores de DD. HH. y periodistas. De este modo, durante la política de SD, la guerra política ha adquirido cada vez más los visos de una guerra contra la población civil.

Resistencia y movilización social: trayectoria y actualidad

Esta guerra social y política ha desencadenado, sin embargo, importantes procesos de resistencia social por parte de vastos sectores de la ciudadanía, tal como lo ilustraré más adelante. Muchas de estas múltiples expresiones de resistencia actuales en Colombia confirman y recrean una tradición social y política constitutiva de la personalidad histórica colombiana. Entre estas referencias históricas se encuentran: 1) las primigenias luchas de resistencia de los indígenas, especialmente en el Cauca (la Gaitana, a la cual aún se la evoca por los indígenas paeces) y la Costa Atlántica, contra la conquista y dominación españolas; 2) las rebeliones de esclavos negros y el éxodo de los cimarrones para constituir luego los palenques como espacios retirados del dominio de la esclavitud y espacio oculto para recrear lo que J. Scott llama un “discurso oculto”, de afirmación de sus valores, sus culturas y de creación de sus propias formas de sobrevivencia; 3) la rebelión de los comuneros en los santanderes contra la política económica de la corona española en el siglo XVIII, bajo el liderazgo de José Antonio Galán y Manuela Beltrán, coetáneo con la rebelión de Túpac Amaru en los Andes peruanos y bolivianos; 4) las gestas de independencia en el siglo XIX dirigidas por Simón Bolívar, con la participación de un ejército plebeyo integrado por zambos, mestizos, mulatos, pardos y negros; 5) la rebelión de los artesanos organizados en sociedades democráticas contra el liberalismo económico a mediados del siglo XIX, que las llevó al poder brevemente, siendo derrocadas por la coalición liberal conservadora de ese entonces; 6) la tradición de mutualismo, ayuda mutua, cooperativismo y solidaridad, persistentes en el tiempo por parte de poblaciones del campo y las ciudades, indígenas, campesinos y artesanos ciudadanos³.

Esta tradición se enriquece en el siglo XX con las luchas de resistencia como 1) la del sindicalismo “heroico” de los años veinte por conquistar derechos laborales y salariales dignos, el cual protagonizó históricas huelgas como las de las bananeras en 1928; 2) las luchas de los campesinos por recuperar sus tierras, por la rebaja de los arriendos o por la libertad de cultivos desde los años treinta hasta los años setenta, en los que aparece más claramente la lucha por una reforma agraria democrática; 3) las luchas de los campesinos liberales contra la violencia desatada por los gobiernos conservadores y la dictadura de Rojas Pinilla en los años cincuenta; 4) la marcha del silencio encabezada por el caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán y su emblemática Oración por la Paz contra la violencia bajo el gobierno de Ospina Pérez (1944-1948); 5) el paro cívico nacional de 1977 contra el hambre

y por libertades políticas, protagonizado por el sindicalismo y sectores populares urbanos; y 6) las luchas cívicas de cientos de municipios y veredas colombianos en los años ochenta por autonomías locales, redistribución del presupuesto nacional y dotación de infraestructura básica de servicios públicos y vías.

Esta trayectoria histórica de las resistencias sociales en Colombia se actualiza en los años ochenta con la formación del movimiento por los DD. HH. en los marcos del gobierno autoritario de Julio César Turbay Ayala (1978-1982); el Movimiento por la Vida, integrado por un espectro plural de actores tras los trágicos acontecimientos de la toma y contratoma del Palacio de Justicia en 1985, por guerrilleros del M-19 y la fuerza pública, del cual surgió la iniciativa de la Semana por la Paz que año tras año se realiza en el mes de septiembre desde 1987; así mismo, se actualiza con el movimiento por la Asamblea Nacional Constituyente que desembocó en la promulgación de la Constitución de 1991. Todas estas expresiones históricas de resistencia muestran que en Colombia la dominación y las situaciones de injusticia siempre han encontrado respuestas activas de actores colectivos que se resisten a la vulneración de sus derechos, de su dignidad y de su autonomía.

En Colombia es muy común referir a la población civil, por ejemplo, en relación con la guerra, en términos de “víctima” de los actores armados; referencia que, sin duda, manifiesta el drama humanitario que dolorosamente padecen sectores importantes de la población como consecuencia de la agudización y degradación del conflicto armado. La violación sistemática y generalizada de los DD. HH. y del DIH a manos de las guerrillas, del paramilitarismo y del Estado, resume las múltiples expresiones de violencia contra la ciudadanía y el grado extremo de degradación del conflicto armado interno colombiano. El desplazamiento forzado, las masacres, los homicidios, los secuestros, las desapariciones forzadas, la destrucción de bienes civiles y el reclutamiento forzado, que se incrementan ostensiblemente, son las manifestaciones concretas de esta dura realidad. La “guerra contra la sociedad” no es fortuita, sino que hace parte a menudo de estrategias de guerra planeadas por los actores armados, orientadas a ejercer eficaz control sobre la población civil, el territorio y sus recursos, las cuales vienen acompañadas de múltiples formas de sometimiento de las organizaciones sociales o comunitarias a los designios del actor armado que domina el territorio o a la destrucción de las mismas cuando la subordinación fracasa o no es posible ejercerla.

Sin embargo, este “neoliberalismo armado” no sólo ha producido víctimas, también ha desatado procesos colectivos muy valiosos de resistencia y de lucha social, en los que la ciudadanía avanza hacia el ejercicio de sus derechos, el cese de la guerra, la búsqueda de la paz, el respeto de sus libertades, la autonomía, el rechazo a las contrarreformas sociales neoliberales y la autogestión económica y social. Es así como, más allá de la cruda realidad del conflicto armado y de las políticas neoliberales y sus consecuencias dramáticas sobre la población, en Colombia se han producido en los últimos años acciones colectivas de la ciudadanía contra la guerra y contra la exclusión social. En los últimos diez años, la resistencia civil no armada contra la guerra y el modelo neoliberal se ha expresado en un conjunto variado de acciones colectivas, algunas de carácter nacional, otras de carácter local, algunas de manera puntual, otras de carácter más orgánico, algunas bajo

formas novedosas de organización y protesta, otras basándose en viejos repertorios de protesta y formas tradicionales de organización, algunas bajo nuevas formas de organización y tradicionales formas de protesta, otras bajo nuevas formas de protesta y tradicionales formas de organización, algunas con objetivos muy limitados circunscritos a los intereses del actor que las protagoniza, otras con objetivos más amplios orientados a desafiar políticamente a los poderes hegemónicos o a producir cambios en las políticas públicas. Igualmente el espectro de actores sociales protagónicos de estas expresiones de resistencia se ha ampliado con la participación, además del sindicalismo, de las comunidades indígenas, afrodescendientes, comunidades barriales urbanas, mujeres, población LGTB y jóvenes, entre otros.

Contra la idea generalizada de unanimismo mediático alrededor de los mandatos de Uribe Vélez, por ejemplo, el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) registra que durante su gobierno la movilización social alcanzó el pico más alto en los últimos cincuenta años. Según su minucioso y riguroso registro, en el período 1958-1974 la media anual de las luchas sociales fue de 173; entre 1975 y 1990 asciende a una media de 476 por año; entre 1991 y 2001 baja ligeramente a 429 por año; y entre 2002 y 2008 se aprecia un considerable aumento al llegar a una media de 643 por año, siendo el año de 2007 el de mayor auge de protestas sociales desde 1975, de lo cual se puede concluir que durante este último período, que coincide con los dos gobiernos de Uribe Vélez se ha presentado el mayor nivel de protesta social en cincuenta años, lo que significa que se han producido dos luchas sociales por día en el país. Aunque las protestas se han producido en todo el territorio nacional, los departamentos de Antioquia, Valle, Santander y Cauca concentran el mayor número de ellas (CINEP, 2009).

Si se les contrasta con el escenario latinoamericano, estas manifestaciones de resistencia social en Colombia no han tenido el alcance y el impacto de las que se han producido, por ejemplo, en países como Bolivia, Argentina, Venezuela y Ecuador a comienzos de siglo, muchas de las cuales han logrado adquirir niveles de rebelión y desencadenado cambios en las relaciones de poder en esos países.

En Colombia, pese a esta diferencia tan marcada con la mayoría de los países latinoamericanos y a los propios factores adversos que la condicionan, como el clima social y político generado por la propia guerra, las acciones colectivas de resistencia no dejan de expresarse, son persistentes en el tiempo y adoptan nuevos desarrollos, incluso impactando en el diseño de las políticas de paz de los gobiernos de turno o conteniendo la aplicación de políticas neoliberales. Muchas de ellas, sobre todo las de base territorial, hunden sus raíces en la configuración de la nación, como los indígenas y los negros, y se nutren de imaginarios y tradiciones milenaristas propios de su cultura.

Uno de los ejes centrales de la resistencia social contemporánea ha sido la guerra. Frente a ella, en los últimos quince años en Colombia se estructuran algunos movimientos de resistencia civil de carácter nacional, con epicentro en las grandes ciudades, integrados en forma pluralista, que traducen el propósito de importantes sectores de la ciudadanía por detener la guerra y encontrar salidas negociadas a la confrontación armada. También en el plano local se estructuran múltiples movimientos de resistencia civil no armada, como expresiones de comunidades barriales en las ciudades, de comunidades negras e indígenas o de comunidades

campesinas en la vasta geografía nacional. Las acciones sociales de resistencia civil no armada a la guerra en Colombia tienen un carácter civilista, por el respeto de los DD. HH. y del DIH, por la paz, la vida y la autonomía de los ciudadanos⁴. Sus protagonistas son fundamentalmente comunidades de base territorial y local, tradicionalmente excluidas y oprimidas, como las comunidades afrocolombianas, indígenas, campesinas y algunas comunidades barriales de la periferia de las ciudades. Por lo general, estas acciones colectivas son lideradas por los dirigentes naturales de dichas comunidades, contando con el acompañamiento de algunas ONG nacionales e internacionales y de la Iglesia católica especialmente. Cabe destacar, además, que algunas de estas experiencias de resistencia civil no armada frente a la guerra se transforman o se conjugan con expresiones de resistencia socio-económica contra los impactos negativos del modelo neoliberal de desarrollo o contra la inveterada exclusión de los beneficios del desarrollo social, económico y regional de sus territorios.

En la irrupción de estos movimientos, tanto nacionales como locales, puede leerse la otra dimensión de la guerra en Colombia: la resistencia de sectores importantes de la ciudadanía a aceptar la polarización de la sociedad según las lógicas bélicas de los protagonistas del conflicto, y el fracaso de los mismos por convertir su guerra en guerra civil; asimismo, la dinámica sociopolítica que se desarrolla por fuera del Estado y del control de los protagonistas armados, para construir procesos de paz desde la propia sociedad y contribuir a la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado.

Los movimientos de resistencia civil no armada a la guerra de carácter nacional han sido caracterizados bajo la fórmula genérica de “sociedad civil por la paz” y más recientemente como movimientos por la paz. El itinerario y protagonismo de los movimientos nacionales por la paz es bastante amplio y sostenido en el tiempo. Intentaré aquí presentar una síntesis de los mismos, destacando sus momentos álgidos, sus protagonistas y formas de acción⁵. El momento realmente ascendente del movimiento por la paz en Colombia comienza a inicios de los años noventa, asociado en un primer momento con la declaratoria de “guerra integral” del presidente César Gaviria para combatir a las guerrillas, tras el fracaso del proceso de negociación adelantado por ese gobierno con las guerrillas de las FARC y el ELN en Tlaxcala, México. Desde entonces, en la medida en que el conflicto armado escalonaba a niveles impredecibles, más se fortalecía el movimiento por la paz, especialmente por los efectos perversos del mismo sobre la población civil no combatiente.

Para mediados de los años noventa, la movilización ciudadana por la paz se había convertido prácticamente en el único movimiento social y político de importancia en el país, con independencia del Estado y de los partidos políticos, al cual confluían por supuesto viejos y nuevos movimientos sociales organizados alrededor de temas y problemas particulares. En 1995, la jerarquía de la iglesia católica organizó la Comisión de Conciliación Nacional, con la intención de mediar entre las partes en conflicto y estructurar una política permanente de paz, de la cual formaron parte obispos, políticos, líderes sindicales, ex-militares, periodistas y empresarios. Por su parte, las centrales obreras, las ONG de derechos humanos y activistas de izquierda conformaron el Comité de Búsqueda por la Paz para con-

tribuir a la misma desde una perspectiva popular. Este comité organizó seminarios sobre paz integral y sociedad civil, con la participación de trabajadores, indígenas, grupos de mujeres, de jóvenes y ambientalistas, con la intención de construir un gran movimiento social por la paz.

“...el mayor esfuerzo político se cristalizó en la organización de lo que sería calificado más tarde como, sin lugar a dudas, la expresión pública y política más trascendental del movimiento por la paz en Colombia: el Mandato por la Paz, la Vida y la Libertad”

En 1996 la confluencia entre la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz) y País Libre por anudar esfuerzos contra la guerra y sus efectos sobre la población civil, permitió la realización de manifestaciones conjuntas en diciembre de ese año. Sin embargo, el mayor esfuerzo político se cristalizó en la organización de lo que sería calificado más tarde como, sin lugar a dudas, la expresión pública y política más trascendental del movimiento por la paz en Colombia: el Mandato por la Paz, la Vida y la Libertad. La idea consistió en realizar una consulta a la ciudadanía que tuviera la fuerza de un mandato del constituyente primario, coincidiendo con la realización de las elecciones locales y regionales en octubre de 1997. Además de los organizadores iniciales como Redepaz, País Libre y UNICEF, al proceso de organización del mandato se vincularon ONGs de derechos humanos, organizaciones sindicales y empresariales, entre otros.

La campaña alrededor del mandato, que contó con el apoyo de los medios, la Iglesia católica y algunos mandatarios locales, hizo de éste el proceso político más importante del país en la coyuntura, superando en importancia incluso a las propias elecciones regionales y locales convocadas para la misma fecha. El proceso culminó con el resultado de cerca de 10 millones de votos de colombianos a favor del Mandato Ciudadano. Más allá del impacto político producido en términos de legitimidad de la salida negociada al conflicto armado, el mandato tuvo impactos políticos prácticos como, por ejemplo, incidir en la agenda de discusión pública, la aplicación de la prohibición legal de la participación de menores de 18 años en la guerra y la prohibición de la vinculación de civiles en actividades de inteligencia y vigilancia a través de las cooperativas de seguridad como las Convivir. Asimismo, el mandato desencadena el proceso de diálogo entablado entre el ELN y la sociedad civil en Maguncia, Alemania, que facilita los acercamientos entre este grupo armado y el gobierno nacional, malgrado posteriormente con la presidencia de Andrés Pastrana.

Para 1999 esa convergencia de fuerzas y movimientos realizó marchas y acciones conjuntas contra el secuestro y la desaparición forzada, llevando la iniciativa ante el Congreso de la República para que esta última fuera tipificada como delito, tal como se había hecho respecto del secuestro. Para diciembre del mismo año se organizaron en todo el país marchas por el “¡no más!”, con el apoyo sesgado de los medios a favor del “¡no más!” secuestros, intentando darles un sentido de

condena a las guerrillas. Pese a la amplia movilización desencadenada alrededor del “¡no más!”, con cerca de 4 millones de manifestantes, las marchas dejaron el sinsabor, sobre todo entre Redepaz y las organizaciones sociales, de haber sido manipuladas y aprovechadas a favor de un sector y de condena a otros. Esto marcó el derrotero en el curso de acción subsiguiente del movimiento por la paz. En lo sucesivo, debido a controversias y disputas por los sentidos de la acción colectiva, el movimiento ciudadano por la paz terminó dividido y debilitado, situación que se vio favorecida por el inicio del proceso de paz del gobierno del presidente Pastrana con las FARC en 1998 y la expectativa suscitada por el mismo en amplios sectores de la ciudadanía. Cuando el proceso de paz se suspende, el movimiento por la paz entra en un verdadero período de crisis y reflujo.

Además de los anteriores movimientos nacionales por la paz, se conocen otras iniciativas valiosas como, por ejemplo, Colombia Va, Paz Colombia, Red de Universidades por la Paz, Ruta Pacífica de Mujeres y la Red Nacional de Mujeres, entre otros. Estas últimas organizaron una amplia movilización de las mujeres contra la guerra el 25 de julio de 2002, así como diversas marchas a zonas azotadas por el conflicto en solidaridad con la población civil (Rojas Rodríguez, 2004). Más recientemente, cabe destacar la fuerza que en los últimos años han cobrado las movilizaciones de las víctimas y los desplazados, quienes exigen verdad, justicia, reparación y reconocimiento de sus derechos. El movimiento de víctimas, por ejemplo, ha sido artífice de los debates y promulgación de las leyes de víctimas y de tierras, denunciando los alcances recortados de los proyectos presentados por el gobierno del presidente Santos al Congreso de la República.

Por otra parte, en la medida en que el conflicto armado adquirió progresivamente una dimensión territorializada y local, sobre todo en los últimos ocho años, puede advertirse igualmente una pérdida relativa de centralidad de lo nacional respecto a lo local en la movilización ciudadana contra la guerra y por la paz.

Muchas de las experiencias territorializadas y locales de resistencia civil no armada se han constituido en expresiones orgánicas de sus comunidades (“comunidades de paz” o “territorios de paz”), que surgieron en un comienzo de manera espontánea para oponerse a la agresión de que han sido víctima por parte de los diferentes actores armados o contra la pretensión de éstos de involucrarlos en acciones bélicas contra otros. Estos movimientos de resistencia civil no armada son, por lo general, de base popular, claman contra la polarización, trabajan por la reconciliación, la convivencia pacífica y la reconstrucción social e identitaria de sus comunidades locales.

Cabe destacar, como dijimos antes, que algunas de estas experiencias de resistencia civil no armada frente a la guerra se transforman o conjugan en expresiones de resistencia social contra los impactos negativos del modelo neoliberal de desarrollo o contra la inveterada exclusión de los beneficios del desarrollo social, económico y regional de sus territorios. Empresas productivas, cooperativas de trabajo artesanal o explotaciones agropecuarias comunitarias son algunas de las muy variadas formas de integración social y comunitaria y de resistencia social frente a la exclusión y los desmanes de la guerra.

Entre muchas de las acciones colectivas de resistencia civil no armada de base territorial de los últimos años en el país, se destacan, por ejemplo: 1) el “Proyecto

Nasa”, en Toribío Cauca, protagonizado por los indígenas paeces; 2) la experiencia de comunidades afrodescendientes, conocida como la Asociación Campesina Integral del Atrato (HACIA) en el Medio Atrato chocoano; 3) la experiencia campesina de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC) en el corregimiento de La India (Santander); 4) la experiencia indígena de Neutralidad Activa de la Organización Indígena de Antioquia (OIA); 5) la experiencia campesina de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en Urabá antioqueño, una de las más duramente asediadas por los protagonistas armados; 6) la experiencia de comunidades negras de la Comunidad de Paz de San Francisco de Asís, en Urabá chocoano; 7) la experiencia de comunidades negras, conocida como Comunidades en Autodeterminación, Vida y Dignidad (CAVIDA) en Urabá chocoano; 8) la experiencia indígena de “La María” en el Cauca; la experiencia indígena de Resistencia Comunitaria de Caldon, en el Cauca (Hernández, 2003); 9) el proceso de soberanía popular de Mogotes, en Santander; 10) la experiencia de la Comunidad de Paz del barrio Vallejuelos y de otras comunidades barriales en Medellín; 11) la experiencia en los municipios del Alto Ariari, en el pie de monte de los Llanos Orientales; 12) la experiencia del Valle del río Cimitarra; 13) la de los municipios del Oriente antioqueño; 14) las experiencias en los municipios de Urabá antioqueño; 15) la de Coconuco, al oriente del departamento del Cauca (Samper, 2002); y, finalmente, 16) la experiencia de la comunidad indígena emberá chamí, en el municipio de Riosucio (Caldas).

Cabe destacar igualmente las iniciativas de paz desde la base con énfasis en la profundización de la democracia (Hernández, 2004), como 1) la Asamblea Municipal Constituyente de Mogotes, en Santander, en 1997; 2) Pensilvania Comunidad Viva, en Caldas, en 2001; 3) la Asamblea Municipal Constituyente de Tarso, en Antioquia, en 2001; y, más recientemente, 4) la Asamblea Constituyente de Antioquia, en 2004. Los objetivos de estas asambleas constituyentes son los de promover la elaboración de planes de desarrollo local o regional, promover una cultura política democrática, combatir el clientelismo y la corrupción en la administración pública y de oposición a la guerra y por la paz.

En los barrios de las principales ciudades del país, como Bogotá y Medellín, las comunidades barriales desarrollan desde hace varios años múltiples formas de resistencia civil no armada, muchas veces de manera simulada, algunas en forma confrontacional, contra el dominio de los actores armados ilegales en sus territorios, por la defensa de la vida y sus derechos y el respeto a las organizaciones sociales.

Por otra parte, frente a la globalización neoliberal de la economía y la privatización del Estado, son muy variadas las formas de resistencia articuladas por los sectores subalternos, aunque de menor resonancia pública que las desarrolladas frente a la guerra. Las acciones colectivas de resistencia en este campo han sido protagonizadas fundamentalmente por los tradicionales movimientos sociales, en especial por el sindicalismo, destacándose el sector de trabajadores del Estado, el cual –pese a su proverbial debilidad histórica y su debilitamiento actual como producto de los efectos de la guerra y la reestructuración económica neoliberal⁶– ha conjugado las acciones al interior de las empresas o de las diferentes ramas del sector público con acciones nacionales de protesta, como por ejemplo, paros

nacionales, manifestaciones públicas y concentraciones en las principales ciudades del país, en las que ha intentado articular a otros sectores urbanos, cívicos, estudiantiles, campesinos e indígenas. Estas acciones han sido lideradas por las grandes centrales obreras, por trabajadores del Estado o por sindicatos de industria como la Unión Sindical Obrera, los empleados bancarios y los educadores. En el centro de estas expresiones de resistencia está la defensa de derechos sociales y laborales adquiridos, como la contratación colectiva, el derecho al trabajo, la defensa de los salarios, la defensa de la universidad pública y la calidad de la educación, la defensa del patrimonio nacional de las empresas estatales contra su privatización y contra la flexibilización laboral, entre otros. La más reciente de estas movilizaciones nacionales fue la realizada el 18 de febrero de 2010 por miles de personas en todo el país contra los decretos de Emergencia Social del presidente Uribe, que pretendían reformar, en un sentido aún más mercantilista que el que ya tiene, el sistema nacional de salud. La jornada de protesta fue convocada por el Comando Nacional Unitario, integrado por la cuatro centrales sindicales del país (CUT, CGT, CTC y CPC), y fue respaldada por decenas de organizaciones sociales y políticas de carácter regional y local.

En el marco de la reciente negociación del TLC con los EE.UU., la resistencia contra la globalización neoliberal se ha reactivado a nivel nacional, destacándose el papel protagónico ganado por los indígenas del sur del país, quienes han realizado varias marchas por la carreteras principales de pueblos y ciudades, incluida la vía panamericana que une a los países de Suramérica, con bloqueos de vías y tomas de plazas públicas. Más recientemente destaca el papel protagónico que vienen cobrando los trabajadores vinculados a la agroindustria o la explotación de petróleo. Cabe registrar especialmente el paro sostenido por varios meses en 2008 por los corteros de caña de azúcar del Valle del Cauca, por mejorar las condiciones salariales y laborales y en contra de las cooperativas de trabajo asociado; asimismo, la huelga con visos de estallido social y laboral protagonizada por más de 10 mil trabajadores petroleros en Puerto Gaitán (Meta) contra la multinacional canadiense Pacific Rubiales Energy, que opera en Campo Rubiales, debido al despido de más de mil trabajadores y por la exigencia de mejorar las condiciones salariales y laborales.

Al lado de las anteriores expresiones de resistencia colectiva emergen formas inéditas de “emprendimiento” económico, de base comunitaria, vecinal o familiar, inspiradas en criterios de solidaridad, ayuda mutua y cooperación, algunas de las cuales actúan coordinadamente en forma de red; asimismo, se fortalecen formas arraigadas de economía solidaria, como el mutualismo y el cooperativismo. La mayoría de estas formas de “economía popular” se desenvuelven en el sector servicios, los alimentos, la producción agropecuaria, el sector artesanal y las confecciones. Muchas de estas experiencias, además, trascienden el campo de lo económico e incorporan una fuerte dimensión social, en términos de contribuir a la reconstrucción del tejido social gravemente deteriorado por los efectos de la exclusión o de la guerra, generando así fuertes lazos de solidaridad, sentido de identidad y de pertenencia a un nosotros. Se trata de formas de resistencia civil no armadas articuladas alrededor de la problemática social y contra la exclusión.

Conclusiones

De acuerdo con esta apretada síntesis, en el caso de Colombia, la resistencia social se cuece en el contexto entrecruzado de la guerra y el neoliberalismo. Como dijimos antes, Colombia es quizás el único país de América Latina en el que se conjugan e interpenetran tan profundamente las dos lógicas o tendencias dominantes que caracterizan el contexto mundial: la guerra “contra el terrorismo” y la imposición del neoliberalismo. Asimismo, es quizás el único país en el que la resistencia social es un conjunto muy variado de acciones colectivas que se desarrolla en el campo de la lucha contra la guerra y en el campo de la lucha contra la exclusión social y la pobreza, dos campos de acción con desarrollos muy desiguales y niveles de articulación aún muy precarios.

En el contexto colombiano, hasta muy recientemente, ha cobrado mayor peso relativo entre la ciudadanía la demanda de “seguridad” por encima de la de bienestar social y económico: empleo de calidad, educación, salud y seguridad social. El problema de la guerra no sólo permite comprender la alta popularidad de la cual gozó el presidente Uribe según las encuestas de opinión, sino también el mayor peso e importancia cobrado por las acciones colectivas de resistencia civil no armada contra la guerra sobre las formas de resistencia a las políticas de exclusión y de pobreza ejecutadas por el gobierno. Por otro lado, paradójicamente, la guerra ha significado un mayor estrechamiento del espacio político y social y, en muchos casos, ha significado el cierre de las posibilidades de resistencia social contra las políticas neoliberales, la cual ha sido sistemáticamente criminalizada.

Por otra parte, si bien la resistencia social contra la guerra ha cobrado especial fuerza en los últimos años, aún no se cuenta con un movimiento nacional de resistencia, coordinado regional y nacionalmente. Tales intentos se frustraron cuando se creyó que se estaba en su mejor momento a finales de los noventa. Sin embargo, pese a la situación de crisis y reflujos de los movimientos nacionales por la paz, perviven importantes acumulados en términos organizativos y de redes, así como de propuestas políticas de paz, tal vez a la espera de una nueva coyuntura de oportunidad política. En la actualidad, tales acciones colectivas, con desarrollos y fortalezas desiguales, siguen siendo expresiones fragmentadas, en las que la lógica política contra la guerra tiende a subordinar a muchas de las expresiones de resistencia diferentes a las de la guerra.

En buena parte de los países de América Latina, la resistencia social se transforma en resistencia política, o lo social y lo político tienden a conjugarse. En Colombia, por el contrario, la resistencia social no logra articularse aún con la resistencia política, en este caso con la resistencia a la guerra. Sus puntos de encuentro siguen siendo aún muy frágiles o esquivos.

Bibliografía

CINEP 2009 *Informe Especial. La Protesta Social 2002-2008: En cuestión las políticas de Uribe Vélez* en <<http://www.cinep.org.co/sites/cinep.cinep.org.co/files/Informe%20Especial%20Cinep%20-%20Protesta%20Social%202002-%202008.pdf>> acceso 10 de agosto de 2011.

- Fals Borda, Orlando 2004 "Ciencia propia y socialismo autóctono: propuesta para el enfrentamiento de la crisis en Colombia" en Castillo Gómez, Luis Carlos (ed.) *Colombia a comienzos del nuevo milenio. VIII Coloquio Nacional de Sociología* (Santiago de Cali: Universidad del Valle).
- Fernández, Carlos; García-Durán, Mauricio y Sarmiento, Fernando 2004 "Movilización por la paz en Colombia. 1978-2002" en *Controversia* (Bogotá) número extraordinario, febrero, en <<http://www.c-r.org/our-work/accord/colombia/spanish/movilizacion.php>> acceso 10 de agosto de 2011.
- Hernández Delgado, Esperanza 2003 "Resistencia civil en Colombia: dilemas, límites y posibilidades" ponencia presentada en el *Encuentro Internacional La resistencia Civil*, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, 13 al 16 de agosto.
- Hernández Delgado, Esperanza 2004 "Obligados a actuar. Iniciativas de paz desde la base en Colombia" en *Controversia* (Bogotá) número extraordinario, febrero, en <<http://www.c-r.org/our-work/accord/colombia/spanish/obligados.php>> acceso 10 de agosto de 2011.
- Llorente, María Victoria 2009 "Introducción" en Varios autores *Cuadernos del Conflicto. Conflicto Armado e Iniciativas de Paz en Colombia* (Fundación Ideas Para la Paz/Woodrow Wilson International Center for scholars Latin American Program).
- Nieto López, Jaime Rafael 2008 *Resistencia. Capturas y Fugas del Poder* (Bogotá: Desde Abajo).
- Nieto López, Jaime Rafael 2009 "Resistencia civil no armada en Medellín. La Voz y la Fuga de las Comunidades Urbanas" en *Análisis Político* (Bogotá: Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia) N° 67, septiembre-diciembre.
- Reyes Posada, Alejandro 2009 *Guerreros y Campesinos. El despojo de la tierra en Colombia* (Bogotá: Norma).
- Rojas Rodríguez, Jorge 2004 "La construcción política de la paz en Colombia: un desafío de la sociedad civil" en *Controversia* (Bogotá) número extraordinario, febrero. En: <<http://www.c-r.org/our-work/accord/colombia/spanish/construccion-politica.php>> acceso 10 de agosto de 2011.
- Romero, Mauricio (ed.) 2011 *La economía de los paramilitares. Redes de corrupción, negocios y política* (Bogotá: Nuevo Arco Iris/Debates).
- Romero, Mauricio 2001 "Movilizaciones por la paz, cooperación y sociedad civil en Colombia" en Archila, Mauricio y Pardo, Mauricio (eds.) *Movimientos Sociales, Estado y democracia* (Bogotá: CES-Icanh).
- Samper, Mary 2002 *Una Colombia Posible. Historias de Resistencia Civil Frente a la Guerra* (Bogotá: Norma).
- Sarmiento Anzola, Libardo 2005 "Malestar social y política pública. 2001-2004" en *Foro* (Bogotá) N° 52, febrero.
- Sarmiento Anzola, Libardo 2009 "El proyecto social del uribismo" en *Caja de Herramientas* (Bogotá) Año 15, N° 115, junio.

Notas

1 Se estima que alrededor de 40 estructuras territoriales de las FARC han sido desmanteladas (Llorente, 2009).

2 En general, este fue el tono de las declaraciones emitidas en los medios masivos de comunicación por parte del ministro de la Defensa y los altos mandos militares luego de los duros golpes contrainsurgentes de 2008.

3 Para una reconstrucción breve y magistral de las raíces y desarrollo de la resistencia en Colombia desde una perspectiva histórica, confróntese la ponencia del maestro Orlando Fals Borda, en Fals Borda (2004).

4 Las experiencias de resistencia provenientes de las comunidades indígenas tienen un marcado énfasis

en la defensa del territorio y la identidad cultural.

5 Para esto me baso fundamentalmente en Romero (2001) y Fernández, García-Durán y Sarmiento (2004).

6 El sindicalismo es uno de los movimientos sociales más duramente golpeados por la reestructuración neoliberal y la guerra. Debe tenerse en cuenta que Colombia es uno de los países de América Latina con menor tasa de sindicalización –no más del 4% de la población económica activa–, pese a tener un nivel de desarrollo económico relativo; además registra una de las mayores tasas de asesinatos de líderes sindicales en el mundo y una de las culturas antisindicales más arraigadas entre el empresariado latinoamericano.